

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo por algunos individuos del Ayuntamiento de la ciudad de Pachuca, contra una providencia del Gefe Político que los suspendió del cargo popular de consejales.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido ante ese Juzgado por algunos individuos del Ayuntamiento de esta capital; su estado supuesto, que es el de alegar de buena prueba, ante vd. dice: que por las constancias del expediente y las pruebas aducidas por los peticionarios, y el que suscribe, es indudable que proceda el recurso interpuesto, segun pasa á demostrarlo.

De la vista del expediente surgen las siguientes cuestiones, que el Promotor propone examinar:

1ª Los individuos suspensos en el ejercicio de sus funciones, como miembros del Ayuntamiento, ¿han tenido ó no derecho para pedir amparo? Mejor dicho: ¿tal peticion la han elevado como corporacion, ó como simples individuos?

2ª El Consejo de Distrito que los declaró suspensos, ¿fué un tribunal? Y en tal caso ¿fué competente para juzgarlos y obró en la órbita de sus atribuciones?

3ª En la averiguacion ó juicio que precedió á la suspension, ¿se observaron las procripciones que la Constitucion general señala para tales casos? ¿Hubo alguna ó algunas garantías violadas en contra de los individuos que han pedido el amparo?

4ª La suspension decretada por el Consejo de Distrito, importa una verdadera pena para los individuos mencionados? Y si es una pena, ¿puede imponerse por dicho Consejo?

5ª Como resulta lo de todas estas cuestiones, ¿procede ó no procede el recurso de amparo?

Antes de entrar al examen de aquellas cuestiones, el Promotor advierte á ese Juzgado, que tal vez tendrá que tocar otra íntimamente enlazada con la de peticion de amparo, y que le dió origen, siendo por decirlo así su causa determinante. El Promotor se refiere á la cuestion electoral de Diputados á la Legislatura de este Estado, cuya eleccion tuvo lugar en esta ciudad el dia 8 del mes próximo pasado; pero protexta que se ocupará de esta cuestion solo incidentalmente y por el estrecho enlace que tiene con aquella peticion, como antes ha dicho, haciendo á un lado todo aquello que sea puramente local y que ninguna relacion tenga con el presente juicio.

Sentado esto, pasa á examinar la primera cuestion.

Los ciudadanos Lic. Félix Vergara Lope, Lic. Mariano Navarro, Dr. Manuel Areleyra, Tomás Hernandez, Jesus de Ozorno, José María Islas, Jesus Islas, Abraham Pastrana y Jesus Arias, presidente el primero, síndico el segundo, y consejales los restantes del Ayuntamiento de esta ciudad, se presentaron á ese Juzgado el dia 5 del mes próximo pasado, quejándose de que habian sido suspensos en sus respectivos cargos por una resolucion del Consejo de Distrito, que les comunicó el ciudadano Juan Togno que funcionaba entonces como Gefe Político. Segun los quejosos, el motivo de haber sido suspensos, fué porque se les imputaba haber extraido el sello del Ayuntamiento ó intentado falsear el voto popular en las elecciones de Diputados. Los mismos quejosos pidieron amparo contra aquella providencia.

Basta la simple lectura de su escrito para persuadirse, de que no intentan el amparo como corporacion sino como simples individuos. No invocan en su apoyo las leyes del Estado, que reglamentan la creacion, subsistencia y atribuciones de los cuerpos municipales, sino la carta fundamental de

la República en sus artículos 14, 16, 20, 21, 101 y 126: se quejan de violación de garantías, y si ocurrieron simultáneamente en demanda del amparo, fué, porque aquellas se violaron en todos á la vez.

El actual Gefe Político ciudadano Angel Hermosillo, al evacuar su informe visible de fojas 23 á la 27, cuaderno principal, dijo: que habia vehementes sospechas de que el presidente municipal, al llevarse á su casa el sello del Ayuntamiento, intentaba falsear el voto popular; pero como despues los demas miembros de aquella corporacion aprobaron la conducta del Presidente, y autorizaron el hecho de que el sello permaneciera en una casa particular, aquellas sospechas vinieron á hacerse extensivas á toda la corporacion. El mismo Gefe Político dice mas adelante: que al decretar el Juzgado de Distrito la reposicion de los miembros del Ayuntamiento, calificando de urgente esta medida, cometió un verdadero atentado contra la independencia y soberanía del Estado, pues no tratándose de individuos particulares sino de una corporacion, cuyas funciones y deberes están detalladas por las leyes del mismo Estado, á las autoridades de éste toca ocuparse exclusivamente de todo lo relativo al desempeño de su encargo.

A juzgar por el contenido de estos párrafos, del informe del C. Gefe Político, no fueron solo algunos individuos del Ayuntamiento, sino toda la corporacion la culpable de haber sustraído el sello é intentado falsear el voto popular.

Veámos si es cierto lo que sobre este punto dice aquel funcionario.

En la acta del Consejo de Distrito, en que dá principio el juicio, se registran estas palabras textuales: "... y habiéndose impuesto detenidamente (el Consejo) de todas las circunstancias que forman la infracción gubernativa, y considerando, que de ella aparece que tanto el C. Alcalde Municipal como los ciudadanos consejales que aprobaron la acta del día 2 del corriente, (Enero) que corre á fojas 10,

"11 y 12, revelan ciertas tendencias para falsificar el voto popular en las próximas elecciones de diputados, haciendo mal uso del sello de la Corporacion para hacerla recaer en determinadas personas etc."

En esto claramente se ve, que la resolución del Consejo de Distrito, solo comprendió al Presidente y consejales del Ayuntamiento que aprobaron la acta del día 2 de Enero, á quienes el mismo Consejo les atribuyó ciertas tendencias á falsificar el voto popular. Lo mismo dijo el C. Juan Togno que formó parte del consejo al absolver las posiciones que le articuló el Presidente municipal, Lic. Vergara Lope, como puede verse en aquella diligencia que se registra á fojas 17 del cuaderno de sus pruebas, en la que dice el C. Togno; "Que por órden del Gobierno sustanció la informacion criminal sobre extraccion del sello del Ayuntamiento; pero que no comprendia á todos los miembros de este tal informacion, sino á algunos de ellos, que fueron los que firmaron la acta del día 2." En dicha acta que corre certificada de fojas 3 á 6, cuaderno de pruebas del Presidente Municipal, solo aparecen los nombres de los ciudadanos Vergara Lope, Navarro, Hernandez, Arias, Pastrana, Osorno, Islas José María y Aveleyra. Segun la lista que corre á fojas 9, cuaderno de pruebas del que suscribe, el Ayuntamiento de que formaban parte los miembros suspensos, se componia de trece individuos; de estos solo debieron ser suspensos ocho, que fueron los que firmaron la acta del día 2 de Enero, luego no fué suspensa toda la Corporacion.

El mismo actual Gefe Político lo dice así tambien, aunque no explícitamente, al evacuar el informe que se le pidió á solicitud del que suscribe, y que se registra á fojas 8 del cuaderno de sus pruebas, pues aquel funcionario, manifestó al rendir tal informe, que no habiendo sido culpables todos los miembros del Ayuntamiento, no todos fueron suspensos. Sobre este punto es muy de notarse que los ciudadanos Doctor Miguel Varela y Jesus Islas, ni concurren

ron al cabildo, ni firmaron la acta del día 2, y sin embargo, fueron también comprendidos en la suspensión, puesto que no se les llamó para formar parte del Ayuntamiento que sustituyó al suspenso, según puede verse en el referido informe de fojas 8.

De lo expuesto se deduce: que los individuos que firmaron el recurso de 5 de Enero próximo pasado, en que solicitan amparo, no lo hicieron como Corporación sino como simples individuos: que malamente puede decirse que pidieron el amparo como Corporación, puesto que no fué suspensa toda esta, sino solo algunos de sus miembros: que aunque pudiera creerse que lo hiciera del primer modo por formar la mayoría del Ayuntamiento, debemos atenernos á las leyes que invocan á su favor, que no son las del Estado, sino las Constitucionales por garantías violadas; y por último, que si ocurrieron simultáneamente en demanda de amparo, fué como antes se ha dicho, porque aquellas garantías se violaron en todos á la vez.

Vengamos ahora, á la segunda cuestión; examinando si el Consejo de Distrito que lo suspendió, fué en Tribunal competente para juzgarlos, y si obró ó no en la esfera de sus facultades.

Ante todo, es necesario advertir, que dicho Consejo era enteramente desconocido, no solo en el Estado, sino aun en esta capital.

Es cierto que la ley de 21 de Abril de 1868 que lo creó, dispone en su artículo 37 que aquel cuerpo deberá formarse del Gefe político, Juez de 1ª Instancia, administrador de rentas, presidente y síndico 1º del Ayuntamiento del lugar; pero la misma ley dispone en su artículo 46, que el Consejo de Distrito tendrá una sesión ordinaria cada semana, en los terminos que designe en cada Distrito su reglamento interior, que será formado por el mismo y sometido á la aprobación del Gobierno. Desde que esta porción de la República fué erigida en Estado libre y soberano, no se ha dado una sola vez el caso, si no es el día 4 de Enero

próximo pasado, en que se haya reunido el Consejo: ni tiene ni ha tenido las sesiones ordinarias que previene el artículo citado: ni ha formado su reglamento interior; ni por fin, ha dado de modo alguno á conocer su existencia, por manera, que si la ley de su creación subsistía escrita, estaba en la mas completa inobservancia.

Sentado esto, véamos que clase de atribuciones ejerció el Consejo. Del contesto de la acta que se registra á fojas 2 cuaderno principal, consta, que se erigió en un Tribunal y se avocó el conocimiento de un asunto que á todas luces no era de su incumbencia. Así lo demuestra la acta mencionada, en la que se vé, que reunidos el día 4 de Enero á las ocho y cuarto de la noche, los ciudadanos Gefe político, Juez 2º de 1ª Instancia, administrador de rentas y secretario de la Gefatura, se procedió á la lectura del expediente sobre extracción del sello de la secretaría del Ayuntamiento: que se impuso detenidamente el Consejo de todas las circunstancias que forman la información gubernativa: que considerando que de ellas aparece que tanto el Alcalde municipal como los consejales que aprobaron la acta del día 2 de Enero, revelaban ciertas tendencias para falsificar el voto popular en las elecciones de diputados que estaban próximas, haciendo mal uso del sello de la Corporación para hacerla recaer en determinadas personas; que correspondiendo á los Gefes políticos impedirlo en virtud de las facultades que les dá la fracción 4ª artículo 18, capítulo 2º de la ley de 21 de Abril de 1868, y que teniendo también presente la facultad que concede la fracción 10ª artículo 15 del capítulo y ley ya citados, el Consejo *por unanimidad* y habiendo mayoría conforme al artículo 4º cap. 4º de la misma ley, declaró suspensos al Alcalde municipal y miembros del Ayuntamiento de esta ciudad, etc., etc.

El artículo 41 de la ley citada, dice: que “el Consejo no tendrá mas atribuciones que las de consultar al Gefe político en los asuntos graves en que este funciona-

"rio desee oír su opinion;" pero de la manera con que se resolvió el asunto de que se trata, no fué el Consejo un cuerpo meramente consultor que dió al Gefe político su opinion sobre lo que debería hacerse en un asunto tan grave como era el de suspender á unos funcionarios de eleccion popular: no consta tampoco, que despues de haber oído el Gefe político la opinion de aquel cuerpo, se conformase con ella y fuera simplemente su ejecutor: lo que consta en realidad, es, que el Consejo fué un Tribunal que por sí y ante sí se erigió clandestinamente, y que desconociendo las fórmulas mas sustanciales, los principios mas comunes é imprescindibles en los juicios criminales, falló por *unanimidad*, aunque sin justificacion, en un asunto de gravedad.

El Consejo, fué un Tribunal clandestino, porque no se reunió á la luz del dia, ni en audiencia pública, sino en el silencio de la noche y en audiencia secreta. Si á los Tribunales ordinarios y preestablecidos por las leyes, les está prohibido actuar de noche y secretamente, á no ser en casos muy urgentes y por ellas previstos, con mayor razon debió estarlo al Consejo de Distrito, cuya existencia era enteramente desconocida segun antes se ha dicho.

El Consejo fué un Tribunal incompleto. El artículo 37 de la ley de 21 de Abril citada, dice en su segunda parte: "Si el negocio fuera de interes para todo el Distrito, serán miembros del Consejo todos los presidentes y síndicos de los Ayuntamientos de aquel." El artículo 40 de la misma ley, dice: "Para que haya Consejo, basta la concurrencia de tres de sus miembros; pero si el negocio de que se trata fuere de interes para todo el Distrito, se necesita para que haya Consejo, la concurrencia de la mayoría de los individuos que deben componerlo." A los miembros del Ayuntamiento suspensos, se les imputó por el Consejo haber querido falsificar el voto popular en las elecciones de diputados que estaban próximas: estas elecciones eran por todo este Distrito electoral compuesto de

las municipalidades de esta Capital, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Tolcayucan y Tizayuca: el negocio importaba á todo el Distrito, puesto que segun el Consejo se trataba de falsificar el voto popular en la eleccion de diputados por el mismo; luego, debieran ser citados y formar parte del Consejo los presidentes y síndicos, no solo de esta municipalidad, sino tambien de las otras que quedan referidas; pero la festinacion, la hora y demas circunstancias en que se reunió el Consejo, revelan que de antemano tenia un determinado fin.

No debió haber concurrido á él el Juez de 1ª Instancia. El artículo 37 citado, dice en su tercera parte: "Siempre que el Consejo tenga que tratar de otorgar licencia para algun litigio, no concurrirá á él el Juez letrado." El espíritu de la ley sobre este punto, se comprende muy fácilmente. Como pudiera suceder que el Juez externara de algun modo su opinion en el Consejo, la ley ha querido que no concorra, aun cuando solo se trate de otorgar licencia para algun litigio, á fin de que no quede inhábil para su conocimiento. Y tan ha sido previsora la ley sobre este punto, que en esta vez se ha realizado el caso por ella previsto.

Segun la nota que se registra al fin de las diligencias sobre estraccion del sello del Ayuntamiento, cuaderno de pruebas del que suscribe, fojas 21, la falta cometida por el presidente municipal, importa un delito de órden comun, por cuyo motivo se mandó poner al responsable á disposicion del Juez competente. De hecho se le ha puesto á la del Juez 2º Lic. D. Francisco de P. Arsiniega, el mismo que formó parte del Consejo y que ahora está procesando á dicho presidente por el delito del órden comun que se le atribuye. ¿Y podrá legalmente el Sr. Arsiniega ser Juez en este caso cuando ha esternado ya su opinion? Evidentemente que no puede, porque esto es uno de los casos en que el Juez debe forzosamente inhibirse del conocimiento de un asunto. En consecuencia, el Juez de 1ª Ins-

tancia no debió haber concurrido al Consejo.

El mencionado Consejo obró sin justificación al decretar la suspensión del Alcalde municipal y demás miembros del Ayuntamiento que firmaron la acta del día 2 de Enero. Para demostrar esto basta, la simple lectura de la resolución del Consejo, así como del expediente sobre extracción del sello. En la primera, claramente se dice: que considerando el Consejo que de la información gubernativa aparece que tanto el Alcalde municipal como los CC. concejales que aprobaron la acta del día 2, *revelan ciertas tendencias para falsificar el voto popular, etc.* ¿Y cuáles eran esas tendencias? ¿El simple hecho de que el presidente municipal se hubiera llevado á su casa el sello de la secretaría del Ayuntamiento? Pero este hecho está suficientemente explicado en la acta referida. El presidente informó en el Cabildo del mencionado día, que sin duda quería hacerse mal uso del sello, porque se lo había dicho que el jefe de policía Angel Canal andaba repartiendo boletas, y que el administrador de rentas D. Felipe Rebolledo había mandado pedir otras; que por estos motivos había dispuesto llevarse el sello á su casa, como en efecto lo hizo. Esta medida fué aprobada por los miembros del Ayuntamiento presentes al Cabildo; de suerte que tuvo toda la fuerza y vigor de un acuerdo que exime al presidente de toda responsabilidad. En los cuerpos deliberantes, es bien sabido que el presidente de ellos no tiene otras atribuciones que las de ordenar sus discusiones, comunicar sus acuerdos á quienes corresponda, y ser, en fin, su órgano; pero ninguna responsabilidad contrae por los acuerdos buenos ó malos del cuerpo que preside. Si pues el Ayuntamiento determinó que su sello permaneciera en la casa del presidente, buena ó mala aquella determinación, era un acuerdo que no solo exime al presidente de toda responsabilidad, sino que estaba en el deber de cumplirlo. Tampoco son responsables por esto los demás miembros signatarios de

la acta, porque en ella consta que tuvieron motivo para disponer que el sello se guardase en un lugar seguro: estaban en su derecho para hacerlo, y como designaron la casa del presidente, pudieron haber designado cualquiera otro lugar que les prestase la suficiente seguridad.

Pero el Consejo, para decretar la suspensión, se apoyó en las fracciones 10ª artículo 15 y 4ª artículo 18 capítulo 2º de la ley de 21 de Abril de 1868, que hablan de las atribuciones de los jefes políticos. La primera dice que es una de ellas, "Suspender *con causa justificada*, y de acuerdo con el "Consejo de Distrito, á alguno ó á algunos "de los miembros de los Ayuntamientos de "aquel, dando cuenta inmediatamente al "Gobierno con el expediente respectivo." La segunda fracción dice, que es también atribución de los jefes políticos, "impedir que "los Ayuntamientos, ni autoridades "alguna, intervengan en las elecciones del "Distrito, para que resulten electas deter- "minadas personas." Veamos si estas fracciones son aplicables al caso que nos ocupa.

Segun la primera, los Jefes políticos para suspender á alguno ó algunos de los miembros de los ayuntamientos, deban proceder *con causa justificada*; ¿y dónde está la justificación de que el Presidente y Signatarios del acta del 2 de Enero tratan de falsificar el voto popular? Si se quiere hacer consistir tal justificación en la información que corre de fojas 14 á la 21, cuaderno de pruebas del que suscribe, veamos lo que en ella consta. Los CC. José María Suarez y Marcello Herrera, son los únicos que en aquella información han declarado sobre la sustracción del sello. Suarez es Secretario del Ayuntamiento y Herrera mozo de oficio; pero la declaración del primero no merece legalmente ningún crédito. Prescindiendo de que haya ó no faltado á sus deberes como Secretario, y de que haya ó no procedido con verdad al dar parte al Gefe político de que el sello había sido extraído, es un hecho que en la información de que se trata, tiene el carácter de

acusador ó cuando menos de denunciante, y por lo mismo su disposicion, cualquiera que sea el sentido en que se tome, no tiene ninguna fuerza por carecer de imparcialidad, cuya circunstancia es indispensable en todas las declaraciones que se refieran á algun hecho, para que merezcan crédito.

Queda, pues, solamente la del mozo de oficios. ¿Y qué dice este individuo? Que en pleno día, á presencia del secretario del ayuntamiento y por órden del Presidente, llevó el sello á casa de éste. ¿Y este simple hecho revela de algun modo las tendencias á falsificar el voto popular? Si el Presidente se hubiera llevado el sello de un modo clandestino, y si hubiera en la informacion algunos otros datos para creer que trataba de hacer de él un mal uso, se habria justificado mas ó menos ostensiblemente el motivo de la suspension; pero cuando estos datos no existen, por mas que se busquen, el hecho de que el Presidente se haya llevado el sello á su casa, sin estar administrado con ningun otro dato ó siquiera indicio, no constituye ni una simple presuncion de las tendencias á falsificar el voto popular; y en consecuencia, no se procedió al decretar la suspension, con la causa justificada de que habla la fraccion 10ª citada en la resolucion del Consejo de Distrito.

Tampoco hay un solo hecho que demuestre ó que haga presumir al menos, que el Ayuntamiento trataba de hacer recaer la eleccion en determinada persona; y por lo mismo, está mal aplicada la fraccion 4ª artículo 18 citado por el Consejo. La realidad de las cosas, es: que el Gefe Político ciudadano Juan Tognó, cometió en las elecciones los mismos abusos que imputa á los miembros del Ayuntamiento; es decir, que se mezcló indebidamente en la eleccion de diputados, lo cual está suficientemente acreditado en las diligencias que se registran de fojas 22 á 29, cuaderno de pruebas del que suscribe.

El Consejo de Distrito, desconoció los principios mas comunes, pero imprescindibles en los juicios criminales.

Por regla general, solo debe condenarse al que resulta culpable. Pasaron ya los tiempos en que las penas se hacian extensivas á los que no habian delinquido. En la actualidad, ya no se castiga al hijo por los delitos del padre, ni á la mujer por los delitos del marido, ni á los individuos de una corporacion por los de algunos de sus miembros. Si pues el Presidente municipal fué culpable por haberse llevado á su casa el sello del Ayuntamiento; si el Consejo de Distrito creyó que este hecho importaba una tendencia á falsificar el voto popular; y si estaba en sus facultades imponerle por ello una pena, solo el Presidente debió sufrirla; solo él debió ser suspenso y lanzado de una corporacion á que era indigno de pertenecer; pero imponer esta pena á personas que ningun participio habian tenido en aquel hecho; declarar suspensos á los que ni habian concurrido al cabildo, ni firmado la acta del día 2 de Enero, como los ciudadanos Dr. Miguel Varela y Jesus Islas, es hacer extensivos los castigos á personas que no delinquieron, y segun nuestra legislacion actual, las penas deben ser personales ó *personalísimas*, como dicen los juristas.

El Consejo de Distrito fué incompetente para juzgar á los miembros del Ayuntamiento.

Segun el artículo 41 de la ley de 21 de Abril, el Consejo no debió ni debe tener otras atribuciones que las de un cuerpo meramente consultor del Gefe Político; pero como no se limitó solo á dar su opinion á este funcionario, sino que juntamente con él se erigió en un tribunal, es inconcuso que extralimitó sus facultades é invadió las del poder judicial. La calificacion que hizo sobre el hecho de que el Presidente municipal se hubiera llevado el sello á su casa, llamando *sustraccion* aquel hecho, importa un delito de hurto, porque supuso que tal sustraccion la hizo ocultamente, sin voluntad del cuerpo á que el sello pertenecía, y si no para apropiárselo, al menos para hacer de él un mal uso. La inculpacion que

el mismo Consejo hace á los signatarios de la acta del dos de Enero, de haber intentado falsificar el voto popular, importa un delito de conatos de falsedad; y tanto el hurto como estos conatos, debieron estar sujetos en su conocimiento y castigo, única y exclusivamente al Poder Judicial.

Y tan es cierto que se trataba de delitos del Orden comun, que al fin de las diligencias sobre sustraccion del sello, fojas 21, cuaderno de pruebas del que suscribe, se registra la nota que sigue:

Al márgen se encuentra la razon siguiente:

“Enero 6 de 1871.—Apareciendo del « contenido de la presente acta, que el alcalde municipal ha tratado de coartar la « libertad electoral, contraviniendo lo prevenido en el artículo 93 de la ley electoral « de 30 de Noviembre del año próximo pasado, y en atencion á que la falta importa « un delito del Orden comun, póngase al res- « ponsable á disposicion del Juez competente, remitiéndosele el expediente original.”

El anterior Gefe Político ciudadano Juan Togno, que formó parte del Consejo, al absolver las posesiones que le articuló el presidente municipal, dijo de la manera mas clara y categórica, fojas 17, cuaderno de pruebas del Lic. Vergara Lope, que por orden del Gobierno sustanció la *informacion criminal*, sobre extraccion del sello del Ayuntamiento. Así pues, ha debido darse á este asunto el carácter que verdaderamente debia tener, que era el de criminal del Orden comun; y en consecuencia, ya sea que se considere que el Consejo de Distrito fué un Tribunal, ó que no se considere así, sino como un cuerpo consultor del Gefe Político, y que este decretó la suspension, aquel cuerpo y este funcionario invadieron las atribuciones del poder judicial, y ni aquel ni este pudieron conocer en un asunto para que eran incompetentes, conforme los artículos 13 y 14 de la Constitucion federal, segun los cuales, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por Tribunales especiales, y nadie puede ser juzgado ni senten-

ciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él por el Tribunal que previamente haya establecido la ley.

Examinemos ahora la tercera cuestion; es decir, si en la averiguacion ó juicio que procedió á la suspension de los miembros del ayuntamiento, se observaron ó no las prescripciones que la Constitucion general señala para tales casos; y si en consecuencia, hubo ó no alguna ó algunas garantías violadas respecto de dichos miembros.

El Promotor ha expuesto ya las razones que tiene para que el hecho de la sustraccion del sello, que se imputa al Presidente municipal, y los conatos de falsificar el voto popular, debieran considerarse y se consideraron de facto como delitos del Orden comun. Ha dicho ademas el Promotor, que el C. Juan Togno al absolver posiciones, confesó que por orden del Gobierno sustanció una *informacion criminal* sobre extraccion del sello. Véamos ahora si se observaron las prescripciones constitucionales.

En todo juicio criminal, dice el artículo 20 de la Constitucion, el acusado tendrá las siguientes garantías: «que se le haga « saber el motivo del procedimiento y el « nombre del acusador, si lo hubiere; que se « le tome su declaracion preparatoria dentro de cuarenta y ocho horas, contadas « desde que esté á disposicion de su Juez; « que se le carce con los testigos que designen en su contra; que se le faciliten « los datos que necesite y consten en el « proceso, para preparar sus descargos; y « que se le oiga en defensa por sí ó por persona de su confianza ó por ambas, segun « su voluntad.»

No se necesita un grande esfuerzo para demostrar que no se cumplieron aquellas prescripciones, pues el ciudadano Togno nos ahorra este trabajo al absolver las posiciones que le articuló el Presidente municipal. Segun sus respuestas, que no pueden ser mas claras y categóricas, solo á dicho presidente se le hizo saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador; solo á él

se le pretendió tomar declaración, y si no se hizo, fué por haberse negado á declarar; y solo á él se le careó con su acusador. A los demás miembros del Ayuntamiento suspensos, se les facilitó, según el mismo Tognó, los datos que necesitaban para preparar sus descargos, supuesto que la resolución del Consejo que los suspendió, se les hizo saber por conducto del Presidente á quien se mandó copia de aquella resolución; es decir, que se les dió conocimiento de ella, cuando ya el mal no tenía remedio, cuando ya estaba cometida la infracción constitucional. No se les oyó en defensa, porque no hubo lugar para ello; y efectivamente, fué tal la testinación con que se obró en este asunto, que no alcanzó el tiempo para cumplir unos preceptos de cuya observancia ni el Consejo de Distrito, ni la autoridad política, ni ninguna otra, puede dispensarle.

No hay medio: ó el Consejo de Distrito fué un Tribunal, ó fué solo un cuerpo consultor del Gefe Político, mejor dicho: ó fué el Consejo de Distrito el que suspendió á los miembros del Ayuntamiento, ó fué solo el Gefe Político, de acuerdo con el dictámen de aquel cuerpo. Es así que según el mismo Gefe Político se trataba de una *información criminal*, luego debió cumplirse con los preceptos que para todo juicio de esta clase designa el artículo 20 de la Constitución. Es así que solo parte de esos preceptos se observaron con el Presidente municipal, y ningunos en los demás miembros suspensos; luego tanto respecto del uno como de los otros, hubo violación de las garantías de que deben gozar todos los individuos.

¿Y el funcionario público, por el hecho de serlo, deja de ser individuo, y abdica los derechos que como á tal le conceden las leyes constitucionales? El que suscribe, cree que no, y entiende por el contrario, que el funcionario político es un individuo caracterizado, ya proceda su nombramiento de elección popular ó de cualquiera otra autoridad, ya sea que disfrute sueldo ó que sirva con consejo; y si el nombramiento

procede de elección popular, el funcionario público es todavía si se quiere mas caracterizado, porque al reunir los sufragios de sus conciudadanos, al ser honrado con la confianza pública, es una prueba de que generalmente se lo creyó digno del puesto para que fué llamado.

Los derechos que otorga el artículo 20 citado, los tiene el acusado solo por ser hombre ó individuo. Estos derechos no claudican nunca, y ninguna ley ni autoridad pueden suspenderlos ó proscribirlos. Si pues, el presidente municipal y demás miembros del Ayuntamiento eran responsables por delitos del óden común que exigían una pena, antes de imponérseles, debió oírseles y oírlos en su natural defensa.

En vano podrá alegarse, que tanto el presidente como aquellos miembros, fueran juzgados y sentenciados con arreglo á las leyes del Estado. Aun en este caso debieron observarse las prescripciones del artículo 20, pues ya se ha dicho que las garantías que otorga, ni se pierden ni pueden perderse nunca, aunque se trate del mayor criminal, cualquiera que sea la autoridad que los juzgue, cualquiera que sea la ley que se le aplique, cualquiera que sea la pena que se le imponga. Así se deduce de la inteligencia natural de aquel artículo, y así lo tiene declarado repetidas veces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al revisar algunos juicios de amparo por violación de garantías.

Sin necesidad de citar todas las ejecutorias sobre dichos juicios, véase solamente la que se registra en el número 272 del *Diario Oficial* correspondiente al 17 de Octubre del año próximo pasado, con motivo del juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por los CC. Ignacio de la Peña y Barragan y Juan de la Portilla, diputados á la legislatura de aquel Estado, contra una determinación de la misma, que los destituye de su encargo. Según aquella ejecutoria, cualquiera que fuese el delito que hubieran cometido los

quejosos y la pena que por él merecieran, nunca pudieron ser sentenciados sino por el Juez establecido con anterioridad al acto, y previos los requisitos que ordenan la Constitucion y leyes generales y de dicho Estado de Morelos, debiéndose respetar siempre la Constitucion federal de la República, que en su artículo 14 garantiza á todo individuo el derecho que tiene de ser juzgado y sentenciado solo por el juez á quien toque; y en los 20 y 21 establece, que á nadie se sentencia sin su previa citacion, defensa y demas circunstancias que expresa, no pudiendo los quejosos dejar de ser considerados como individuos, por la circunstancia de ser diputados; que por otra parte, ademas de haberse violado en ellos las garantías expresadas en los artículos constitucionales citados, se atropelló con las que se otorgan á todos los representantes del pueblo para que el sufragio popular sea respetado.

Esta ejecutoria no puede ser mas análoga ni mas aplicable al caso que nos ocupa. Habia unos funcionarios de eleccion popular, como eran los miembros del Ayuntamiento de esta ciudad: dichos funcionarios fueron suspensos en el ejercicio de su encargo por un tribunal incompetente; luego se violaron en ellos los artículos 13 y 14 de la Constitucion federal: los mismos funcionarios fueron suspensos sin su previa citacion, audiencia y defensa; luego tambien se violó el artículo 20 de la misma Constitucion: aquellos funcionarios, por el hecho de serlo, no abdicaron ni perdieron sus derechos como individuos; luego debieron haberse observado los preceptos constitucionales sobre garantías, pues estas se conceden al hombre sea ó no funcionario público.

Véamos ahora si conforme la Constitucion del Estado hubo tambien violacion. Dice la misma Constitucion en su título 2º capítulo 1º:

DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES.

Art. 9º Las leyes que señalan el orden de los juicios civiles ó criminales, serán uniformes en todo el Estado, y ni la legislatura, ni cualquiera otra autoridad podrán dispensar su observancia en casos particulares.

Art. 10. A ningun habitante del Estado se le puede imponer pena, ni aun correccional, de las que aplica la autoridad administrativa ó municipal, sin oírle previamente en cuanto al hecho que la motivó.

Art. 11. Ninguna autoridad, sea judicial, administrativa ó municipal, puede imponer pena, ni aun correccional, si no es en virtud de pruebas tan claras como la luz del dia.

De la simple lectura de estos artículos, resulta: que los miembros del Ayuntamiento no debieron ser juzgados ni sentenciados por un tribunal especial como lo fué el Consejo de Distrito: que no debieron ser suspensos sin oírlos previamente, aun cuando á la suspension se le haya querido dar por el Consejo, el carácter de una medida preventiva, administrativa ó municipal; y finalmente, que no habiendo habido en su contra pruebas tan claras como la luz del dia, de que trataban de falsificar el voto popular, no debió haberse decretado la suspension en el ejercicio del encargo que desempeñaban.

¿Y aquella suspension fué una verdadera pena? Y en tal caso, ¿pudo imponerse por el Consejo de Distrito? Esta es la cuarta de las cuestiones que el que suscribe se ha propuesto examinar.

Pena, dice la ley 1ª título 31, Partida 3ª, "es enmienda de fecho ó escarmiento "que es dado segun ley á algunos, por los "yerros que fizieron;" ó como dicen los criminalistas: es el mal que la ley hace al delincuente, por el mal que él ha hecho con su delito. Segun la ley 4ª del mismo título y partida, hay siete clases de penas, contándose en la sesta la de suspension por tiempo determinado ó á perpetuidad. La

ley tiene el caso de algun abogado ó personero, á quien por el yerro que cometió, se le prohíbe usar de su oficio perpétua ó temporalmente. El caso propuesto no pasa de ser un ejemplo, pues el ejercicio de abogado ó de personero, es como el de cualquiera otro; pero de la inteligencia natural de la ley, venimos en conocimiento de que la suspension, ya se considere perpétua ó limitada á cierto tiempo, es una pena. Supongamos que á un Juez, á un Gobernador, á un Diputado, ó cualquiera otro funcionario, se le suspende en el ejercicio del cargo que desempeña, porque se le acuse de un delito que se pruebe ó no se pruebe en la causa que se le instruya. ¿Podrá nadie dudar que aquella suspension es una pena? Evidentemente que lo es; solo que en el primer caso, la pena será merecida, y en el segundo no lo será.

Aplicando esta teoría al caso que nos ocupa, ¿es una pena la suspension de un cargo municipal, y tal como ha sido aplicada por el Consejo de Distrito? Sí es, y grave.

El C. que ha merecido la confianza pública, y ha sido llamado por el sufragio popular al servicio de aquel cargo, debe mostrar á sus comitentes que no ha desmerecido tal confianza, ni es indigno del servicio para que fué electo; pero cuando el que desempeña uno de estos cargos, es arrojado del puesto á que lo elevó el voto popular, y cuando al arrojársele se le imputa haber querido abusar de la confianza en el depositada y tratado de enervar ó nulificar los derechos del mismo pueblo que lo elevó, aquel individuo debe morir civilmente ante la sociedad, cuyas instituciones trataba de conculcar; pero para que sufra esta muerte civil, esta afrenta en su honra y reputacion, debe haber en su contra pruebas palpables, inconcusas, evidentes: mientras estas pruebas no exitan, el castigo que se le imponga será tan injusto como innecesario.

En los delitos deben verse dos cosas: el delito mismo y la pena con que se castiga.

Cuando el delito exista realmente y se prueba contra el acuerdo, despues de concederle todas las garantías que le otorgan las leyes de la sociedad en que vive, la pena que se le imponga será mas ó menos grave, pero será merecida. Mas cuando el delito no existe, ó cuando no se prueba contra el acusado, ó cuando á este no se le conceden las garantías de audiencia y defenza, á que tiene derecho natural, la pena es entonces injusta ó malamente aplicada. Si se hubiera de algun modo probado que el Presidente y capitulares del Ayuntamiento, trataban de falsificar el voto popular abusando del sello de aquella corporacion, la pena de suspension que se les impuso sería grave, pero merecida, puesto que eran indignos de servir al pueblo que los habia colocado al frente de su Municipio; pero cuando el delito que se les atribuye no existe; cuando solo se ha supuesto con un determinado fin; cuando aun suponiendo que existiera, no se les ha concedido el derecho de su natural defenza, la pena, no solo es grave, sino injusta é innecesaria; los mata civilmente y los deshonorra ante el pueblo que les confió sus destinos.

Tal cual está concebida y ejecutada la resolution del Consejo de Distrito, la suspension equivale á una destitucion. En ella no se dice que el Presidente y Consejales del Ayuntamiento que firmaron el acta del 2 de Enero, quedasen suspensos en sus funciones mientras la autoridad judicial resolvía si eran ó no culpables por los delitos de austracion del sello y conatos de falsedad que se les atribuian: se dan por suficientemente averiguados estos hechos, y se decreta la suspension, absoluta, sin ulterior recurso, sin audiencia y sin apelacion. Se invocan los artículos de una ley inaplicable al caso; y sin examinar si esta ley está ó no en contradiccion con la carta fundamental de la República; si lo está ó no con la Constitucion del Estado; si el Tribunal que la aplica es ó no competente; si obra ó no en la esfera de sus atribuciones y con causa justificada; si viola ó no las garantías

individuales que otorga aquella carta y esta Constitucion, se decreta desde luego la suspension, no como medida precautoria ó interinaria, sino absolutamente, y como una verdadera destitucion.

El actual Gefe político en su informe ya citado, dice, que tratándose de una providencia interina, no tiene la suspension de los miembros del Ayuntamiento el caracter de pena, pues esta lleva en sí la circunstancia de quedar ejecutada perpetua ó irrevocablemente, y nunca son interinas ó provisionales.

El que suscribe, no puede conformarse con esta opinion del C. Gefe político; ya ha dicho que la suspension de los miembros del Ayuntamiento no se decretó con el caracter de interina, mientras que la autoridad judicial resolvía si eran ó no culpables de los delitos que se les atribuían.

Basta leer sobre este punto la acta del Consejo de Distrito, en cuyo documento se vé, que ni en la parte expositiva ni en la resolutive, se dice, ni se indica siquiera, que la suspension será provisional, sino que fué decretada del todo y sin restricciones absolutamente y como un castigo por los delitos que se consideran suficientemente probados con el expediente que el Consejo tuvo á la vista, y de que en dicha acta se hace mérito.

Mucho menos puede el que suscribe conformarse con la teoria del Gefe político sobre las penas, pues si estas llevaran en sí la circunstancia de quedar ejecutadas perpetua é irremisiblemente, vendríamos á concluir, que con excepcion de la pena de muerte, no hay ninguna otra entre nosotros, porque segun nuestra legislacion, la mayor que se conoce es la de diez años de presidio, y no siendo esta perpetua, no puede llamarse pena segun el C. Gefe político. ¿Qué será entonces? ¿simple suspension por diez años de la libertad y del goce de los derechos de ciudadano? No es muy corta la suspension; pero admitida aquella teoria, no tiene otro nombre; de suerte, que si á un funcionario público se la suspende por tiempo determinado mas ó

menos corto, en el ejercicio de su cargo por un delito de que haya sido acusado, tal suspension no importa una pena, porque no se impuso con calidad de perpétua. Tampoco será una pena la destitucion de un cargo, si ésta solo ha de durar por cierto tiempo; de suerte que un diputado, un gobernador ó cualquiera otro funcionario de eleccion popular á quien se destituya, no es una pena la que se le impone, porque no debiendo durar perpetuamente en aquel cargo, la destitucion no puede referirse á perpetuidad, sino solo al tiempo que durara el cargo referido.

El que suscribe, insiste que no puede conformarse con la opinion del C. Gefe político, y en que la suspension de los miembros del Ayuntamiento, tal como fué concebida y ejecutada, importa para ellos una verdadera destitucion y esta es una pena.

Sentado esto, hace el mismo argumento de que se valió en la cuestion tercera. O fué el Consejo de Distrito el que impuso tal pena, erigiéndose en tribunal, ó fué el Gefe Político C. Juan Togno. Si fué el Consejo de Distrito, no pudo imponerla segun lo terminantemente dispuesto en el artículo 21 de la Constitucion federal, que dice á la letra: "La aplicacion de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial;" y aquel Consejo no es una autoridad, ni menos del órden judicial. Si fué el Gefe Político el que la impuso, tampoco estaba en sus facultades, conforme al mismo artículo 21, segun el cual "la autoridad política ó administrativa, solo podrá imponer, como correccion, hasta quinientos pesos de multa ó un mes de reclusion, en los casos y modo que expresamente determina la ley," que por cierto todavía no se expide.

De todo lo alegado resulta: que los individuos suspensos en el ejercicio de sus funciones como miembros del Ayuntamiento de esta ciudad, tuvieron derecho para pedir amparo, puesto que no hicieron tal peticion como corporacion sino como simples individuos. Que el Consejo de Distrito que los declaró suspensos, no es un tribunal in-

competente para juzgarlos, y que obró fuera de la órbita de sus atribuciones.

Que en el juicio ó averiguacion que precedió á la suspension, no se observaron las prescripciones constitucionales, y hubo violacion de las garantías que otorgan los artículos 13, 14 y 20 de la Constitucion general.

Que la suspension fué una verdadera pena, y al imponerse por aquel Consejo ó por la autoridad política, se violó tambien el artículo 21 de la misma Constitucion.

Que en consecuencia, procede el amparo que han pedido, conforme á los artículos 101 fraccion 1ª del referido Código, y 1ª fraccion 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869.

En cuya virtud y con tales fundamentos, el Promotor concluye con la siguiente proposicion que somete á la aprobacion de ese Juzgado:

La Justicia federal ampara y protege á los ciudadanos Lic. Félix Vergara Lope, Lic. Mariano Navarro, Dr. Manuel Aveleyra, Tomás Hernandez, Jesus D. Ozorno, José María Islas, Abraham Pastrana, Jesus Islas y Jesus Arias, contra la providencia que los declaró suspensos en el ejercicio de sus funciones como miembros del Ayuntamiento de esta capital.

Pachuca, Febrero veintitres de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*Rafael Villegas.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Pachuca, Febrero veintisiete, de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos estos autos, sobre amparo de garantías promovidos por los ciudadanos Félix Vergara Lope, Mariano Navarro, Manuel Aveleyra, Tomás Hernandez, Jesus y José María Islas, Abraham Pastrana, Jesus Ozorno y Jesus Arias, contra una providencia de la Jefatura Política del Distrito; en virtud de la cual fueron suspensos con in-

fraccion de los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitucion federal del cargo de regidores del Ayuntamiento de esta ciudad. Considerando: 1º que los quejosos explicaron, como se vé por los documentos de fojas 1, 2 y 3, por menor el hecho que los agraviaba, designaron las garantías violadas, se presentaron como individuos y no como corporacion y llenaron todos los requisitos del artículo 4º de la ley respectiva, para haberse dado entrada al recurso de amparo, 2º Que bastaba examinar atentamente los documentos referidos para persuadirse, que la resolucion del consejo de Distrito, mas bien que los derechos políticos de los Regidores, atacaba sus derechos naturales, para cuya proteccion se han establecido los juicios de amparo. 3º Que no pudiendo hacerse abstraccion del individuo en la persona del empleado ó funcionario, el que como cualquiera hombre tiene derechos naturales, seria la mayor injusticia desecharlo de plano la queja que alguno interpusiera de haber sido violadas sus garantías, cuando de oírle y sustanciarse el juicio correspondiente, podría resultar con evidencia, que el cargo ó empleo solo habia sido pretexto para imponer al quejoso una pena vergonzosa, arrojando injustamente sobre él la deshonra, la afrenta y el descrédito: y 4º que la introduccion del recurso de amparo entablado por empleados ó funcionarios públicos, está sancionado por varias ejecutorias, (las de 20 de Julio de 1869 y 23 de Mayo y 10 de Octubre de 1870).

Considerando: que el auto del día cinco, en cuanto se refiere á la suspension del acto reclamado, comprende dos cuestiones legales que deben examinarse: primera, si procede ó no la suspension, y segunda, si debia decretarse de plano, con solo el escrito de los quejosos, ó sustanciarse artículo conforme á la primera parte del artículo 5º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Considerando respecto del primer punto: 1º que los quejosos pidieron la suspension del acto reclamado; 2º que apareciendo de la relacion de los hechos un ataque mas ó

menos grave á las garantías, no era tiempo de averiguar si aquellos eran ó no ciertos, y si la Gefatura Política había procedido ó no con justificación, pues el juicio vendría á esclarecer la verdad bastando que por los documentos 1 y 2 apareciera un Consejo, pronunciando, sin facultades ningunas, sentencia contra los quejosos ó imponiéndoles la pena de suspensión indefinida ó la destitución, para que el Juzgado comprendiera que estaban amenazadas las garantías; que el caso estaba comprendido en el artículo 1º fracción 1ª de la ley, y que debía decretarse la suspensión conforme al artículo 6º; 3º que no habiendo como no hay disposiciones que determinen los casos en que deba decretarse dicha suspensión, ni estando aun fijado por los tribunales el derecho público sobre este particular, el Juzgado á cuya prudencia se deja la resolución en cada caso que se ofrezca, debía considerar, que en competencia las garantías individuales con el principio de autoridad, debe favorecerse mas la causa de aquellas, porque para sufrir una pena ó otra molestia cualquiera, siempre hay tiempo, pero reparar un daño causado injustamente casi nunca es posible; 4º que si bien es cierto que la sentencia de amparo en el presente negocio, vendría á reparar completamente, sin mengua alguna, el honor de los quejosos, no es á esto á lo que se atiende para suspenderse la ejecución del acto que lo ataca, sino á los profundos disgustos y acerbos padecimientos que experimenta el hombre de bien cuando vé lastimada su reputación, como los que puede experimentar el que es reducido á prisión ó á esclavitud momentáneamente, cuyos actos siempre se suspenden, no obstante que la sentencia de amparo puede restituir la libertad mas completa; 5º que consultando la mente de la ley de 20 de Enero, expresada por las comisiones que dictaminaron respecto de ella, se ve claramente, que no solo cuando se interesa la vida del hombre debe suspenderse el acto, porque la libertad, la seguridad, la igualdad y demás derechos naturales que comprenden sin

duda al honor, tiene los mismos títulos al respeto de las autoridades.

Considerando en cuanto al segundo punto: 1º que la suspensión de la manera que se decretó, procede siempre que hay urgencia notoria (parte final del artículo 5º); 2º que no habiendo como no hay leyes que la determinen, el Juzgado tuvo presente que las garantías que otorga la Constitución son reales y positivas, no supuestas ni imaginarias; que al ofrecerlas sin restricción ni limitación alguna, no consiente que se atropellen ni por un solo instante, mucho menos por una ó dos horas, ni por uno ó dos días; 3º que siendo como debe ser urgente evitar cualquier ataque á la ley fundamental para no hacer de las garantías una quimera, la suspensión de la providencia del Consejo de Distrito que las atacaba notoriamente, era igualmente urgente; 4º que siendo suficientes los documentos presentados para creer que los quejosos estaban sufriendo una pena ó otra molestia, el Juzgado no debía perder el tiempo en informes y traslados, segun la primera parte del artículo 5º, porque se prolongarían los sufrimientos por dos días á lo menos, contra los preceptos constitucionales; 5º que la sustanciación del artículo sobre suspensión, no es un arbitrio concedido á las autoridades para que por dos días á lo menos se haga efectivo el acto reclamado, sino un medio para averiguar breve y sumariamente si están amagadas ó en peligro las garantías, prescindiendo entretanto, de toda calificación sobre la ilegalidad del acto referido; 6º que constando por los documentos presentados de fojas 1 y 2, una falta flagrante, justo ó injusto, á las garantías, sería no solo inútil pedir informe á la autoridad ejecutora y oír al promotor, sino hasta criminal, porque á pretesto de cumplir con las formalidades de la ley, se darían dos días cuando menos para hacer sufrir al quejoso el mal que quería evitar; y 7º que no pudiendo haber sido otra la mente de la ley, al mandar sustanciar el artículo sobre suspensión del acto reclamado, que la de averiguarse por este

medio si existia realmente un acto que debiera suspenderse, porque atentara de algun modo á las garantías, es evidente que se obraria *fuera de la ley* si se sustanciara dicho artículo, no habiendo aquella necesidad, cuando los documentos presentados y la relacion de los hechos arrojan bastante claridad sobre la providencia reclamada.

Considerando: En cuanto á los tres autos del dia 6 de Enero, en los que el Juzgado no esperó el trascurso de veinticuatro horas respecto del Gefe Político, ni el de seis dias respecto del Gobernador: 1º que aunque el artículo 7º dispone que si notificado el auto de suspension la autoridad no se contuviere, "se proceda como lo determinan los artículos 19, 20, 21 y 22;" esta disposicion no puede ni debe referirse á los términos sino á los procedimientos que deben seguirse en caso de resistencia por parte de las autoridades, segun las siguientes razones. Primera: Al disponer el citado artículo 7º que se resuelva el punto de suspension *á la mayor brevedad posible*, es porque los legisladores quisieron, que el acto reclamado se suspendiese tambien *lo mas pronto posible*, á fin de evitar el mal injusto que aquel ocasionara. Segunda: Al decir la misma ley en su artículo 9º "resuelto el punto sobre suspension inmediata, etc.," demuestra con claridad, que el auto suspensivo debe cumplirse *inmediatamente*, esto es, sin mas dilacion que la absolutamente precisa para notificarlo á la autoridad ejecutora, y hacer saber ésta á los quejosos ó á quien correspondiere, que se suspendia la ejecucion de la providencia reclamada, todo lo que pudo fácilmente hacerse en el presente caso por las autoridades del Estado, desde las diez de la mañana hasta las siete y media de la noche del expresado dia 6, si hubiesen tenido voluntad de cumplir la disposicion del Juzgado. Tercera: Estableciendo el art. 20 que si á pesar del requerimiento hecho al inmediato superior, la sentencia no empezare á cumplirse ó no se cumpliera del todo, *si el caso lo permite*, dentro de seis dias se dé aviso al ejecutivo de la Union; bien claro se

vé que este término no se concede por mera cortesía ó por deferencia, sino por necesidad; de manera, que faltando ésta, permitiendo el caso ó la naturaleza del negocio como el presente, suspenderse el acto reclamado en una ó dos horas, no es conforme con el artículo citado retardar por seis ó siete dias el cumplimiento de la providencia suspensiva, y *si es muy anticonstitucional conceder á las autoridades, en estos juicios, un tiempo que no necesiten para suspender el acto atentatorio de las garantías*; y Cuarta: aun suponiendo que tratándose de la ejecucion de la sentencia debieran observarse invariablemente los términos expresados, no puede decirse lo mismo respecto de los autos suspensivos, porque donde no hay la misma razon, no debe aplicarse la misma disposicion. Entre la ejecucion de aquellas, y la de éstos, existe la gran diferencia, de que el cumplimiento de las primeras puede retardarse mas ó menos tiempo sin perjuicio de la vida, del honor, de la libertad, etc., porque oportunamente debió haberse mandado suspender el acto que las atacaba; mientras que si se dilata el cumplimiento de los segundos, dos, cinco, veinticuatro horas y seis dias á pretexto de sujetarse á los términos de los artículos 19 y 20, el acto podia consumarse durante este tiempo de un modo irremediable, dejando burlados los derechos del quejoso, y humillada por impotente la justicia federal. Porque ¿qué importa que la Constitucion prohiba la mutilacion, la marca, los azotes, etc., si bastan una ó dos horas para aplicar estas penas sin que nadie pueda impedirlo? ¿qué importa que el Juzgado de Distrito mande suspender el acto, si ha de esperar tranquilo que pasen veinticuatro horas y seis dias para hacerse obedecer, mirando entretanto, con punible indiferencia, consumarse el mal que se queria cortar? Esto equivaldria á autorizar el atropellamiento de las garantías individuales por algun tiempo, por breve que fuese. Es verdad que si el acto se consuma de un modo irremediable, queda la autoridad ejecutora sujeta á la responsabilidad; pero es-

to, de ningun modo puede dejar satisfecha á la persona ofendida, que cree encontrar en los juicios de amparo un positivo y eficaz recurso contra la arbitrariedad. Si los regidores suspensos hubieran sido repuestos en el ejercicio de sus funciones tan pronto como el Juzgado lo dispuso, ¿habrían perdido, como perdieron, el derecho de intervenir en las elecciones el día 8, y del cual les privó la resolución del consejo que motivó este juicio? Quinto: Habiéndose demostrado anteriormente que la naturaleza de estos juicios no admite dilacion; que si no se impide tan pronto como se pueda la ejecucion del acto reclamado se infringiria la ley fundamental, y se harian ilusorias las garantías que otorga, y debiendo estar las leyes orgánicas animadas del mismo espíritu que el precepto constitucional que reglamentan, es inconcuso, que la ley de 20 de Enero de 1869 se propuso tambien impedir á todo trance, sin demora alguna innecesaria ó injustificada, la violacion de los derechos del hombre, debiendo conciliarse de este modo la letra y el espíritu de aquella disposicion. Mas suponiendo, sin conceder que entre ambas cosas hubiese alguna oposicion, el Juzgado no podia olvidar que "*voluntatem potius quam verba spectari oportet, nam quoties ex verbis legis simpliciter intellectis praefertur iniquum aequo recedimus á verbis et stamus menti rationi que legis.*" (Eseriche, Dic. de Leg. artículo Interpretacion de las leyes, § VI, regla III.) Pretender lo contrario, tratándose de la aplicacion de la ley de 20 de Enero, es obrar en fraude de ella, moviendo sus propias expresiones para eludir su sentido; es revelarse contra su disposicion, combatiendo su intencion con sus mismas palabras. Sexta: La obligacion por parte de la autoridad ejecutora de dar cumplimiento á la orden suspensiva del Juzgado, es *pura y simple*, no á día ó á plazo, y por tanto el Juez de Distrito como *Juez del lugar debe asmar, segun su albedrío, fasta cuanto tiempo seria cosa aguisada para poder cumplir lo que prometió aquel que se obligó. El si*

entendiere que tanto tiempo es ya pasado de que fizo la promision que la pudiere haber cumplido si quisiere débale apremiar que la compla luego fasta tiempo sierto. (Ley 13, tít. 11, Part. 5ª) En el presente caso, cualquiera comprenderá, que bastaba una palabra del Gefe Político, ó una pluma del ciudadano Gobernador para que se suspendiera la ejecucion de la sentencia del Consejo de Distrito; que bastaban cuatro horas para que el primero dijera á los quejosos: "pueden continuar en el ejercicio de sus derechos," supuesto que tuvo tiempo para decirles, "no se reunirán en cabildo," y que el segundo pudo en cinco horas hacer cumplir la providencia del Juzgado, supuesto que en menor tiempo habia admitido la renuncia del ciudadano Juan Tognó, Gefe Político, y nombrado quien lo reemplazara sin que pueda en manera alguna servir de disculpa la renuncia maliciosa de éste ni la falta del secretario de Justicia, porque si ocurrieron á estos expedientes, fué para enervar las disposiciones del Juzgado y declinar toda responsabilidad.

Considerando: En cuanto á los autos en que se participó al Ejecutivo de la Union la desobediencia á las disposiciones del Juzgado, y se solicitó el auxilio de la fuerza federal:

1º Que el Juzgado, sujetándose extrictamente á lo dispuesto por el artículo 20 de la ley de 20 de Enero, se limitó al principio á participar la desobediencia á sus disposiciones, dejando á la prudencia del Gobierno determinar qué providencias debieran dictarse para hacer cumplir el auto suspensivo.

2º Que al preguntarse al suscrito Juez qué clase de auxilio necesitaba, no pudo menos que resolverse por el de la fuerza armada, como el único eficaz para que sus disposiciones fuesen obedecidas, porque una triste experiencia lo habia enseñado, que á pesar de las excitativas del Gobierno General, de las resoluciones terminantes de la Suprema Corte y de los requerimientos de este Juzgado, la justicia federal habia sido

burlada y atropellada por las autoridades del Estado, lo que no debía tolerarse por mas tiempo. En efecto, Clemente del Rollo, reo de peculado, fué puesto por el Juez letrado de Ixmiquilpan á fines de 1869, á disposicion del Gefe Político, para que lo remitiera á este Juzgado que lo habia pedido, y este funcionario lo puso en libertad. Despues, el ciudadano Antonino Tagle expidió al mismo reo un documento concediéndole ciertos plazos para no presentarse á contestar á los cargos que le resultaban, hasta proporcionarse los justificantes que necesitaba, y con dicho documento impidió el expresado Rollo que lo aprehendiera el ciudadano general José Coballos. A Jacinto Artcaga, Creseencio y Feliciano Lara puestos por este Juzgado formalmente presos en el cuartel de la fuerza que manda el ciudadano José María Gambino, se les puso en libertad sin conocimiento del suscrito Juez, de órden del ciudadano Antonino Tagle, segun expuso el expresado Gambino, atropellándose sin el menor escrúpulo la Justicia federal. Dolores Candia, remitido al presidio del Mineral del Monte por órden del expresado ciudadano Antonino Tagle, antes de habérsele consignado *murió víctima de esta disposicion*, un mes despues de notificada al Gobernador la sentencia de la Suprema Corte que amparaba á Candia contra la providencia expresada. Estos hechos hicieron presumir al Juzgado, que en esta vez, como en las anteriores, las disposiciones de la Justicia Federal serian menospreciadas; y los hechos posteriores vinieron á justificar plenamente la intervencion de la fuerza.

Considerando: en cuanto á lo principal, que siendo los artículos 14, 16, 20 y 21, los que sirven de fundamento á la queja de los regidores, debe examinarse separadamente si en efecto han sido violadas las garantías que otorgan.

Considerando: Respecto del artículo 14: 1º que este dispone, que nadie pueda ser *juzgado ni sentenciado* sino por Tribunal que previamente haya establecido la ley;

2º que *juzgar* es enjuiciar, es procesar, es intruir causa con las diligencias y documentos necesarios para *determinar* en juicio (Escriche, Dic. de Leg., artículo "Enjuiciar") y *sentenciar* es resolver la causa condenando ó absolviendo al acusado, declarando en este caso su inocencia, ó imponiéndole en el primero la pena á que se haya hecho acreedor; 3º que examinadas detenidamente la informacion que levantó el Gefe Político, la propia confesion de éste y la resolucion como él la llama, del Consejo de Distrito, se descubre con evidencia, que aquel instruyó una causa contra los Regidores con las constancias de que pudo disponer, y que éste la determinó declarándolos culpables de unos delitos del orden comun y suspendiéndolos en el ejercicio de sus funciones; 4º que no solo no hay ley alguna que conceda á los Gefes Políticos y consejos de Distrito la facultad de juzgar y sentenciar á los Regidores por delitos comunes, como los que se les imputa, antes por el contrario, el artículo 26 de la Constitucion del Estado y el 41 de la ley de 21 de Abril de 1868, establecen, que no podrán reunirse en una persona sola, el Poder Judicial y el Ejecutivo al que pertenecen los Gefes Políticos, y que el Consejo de Distrito no tendrá mas atribuciones que la de consultar á estos funcionarios en los asuntos graves en que deseen oír su opinion; y 5º que está expresamente mandado que las causas criminales sobre delitos cometidos por los alcaldes y demas concejales en el ejercicio de sus funciones, se sigan y determinen por los jueces ordinarios. (Escriche, Dic. de Leg., artículos Juez de 1ª Instancia de partido, § VII, núm. 5, y juicio criminal contra Jueces Magistrados, § II, Ley del Estado de 13 de Febrero de 1849, y artículo 11, capítulo II del decreto de 24 de Marzo de 1813.)

Considerando: respecto del artículo 20: 1º que las garantías que otorga se refieren á todo *proceso criminal*, esto es, á la serie de diligencias que se practican para la averiguacion de un *delito*, descubrimiento y

conviccion del que lo ha cometido, ó imposicion de la pena merecida, (Escriche, en su artículo "Juicio criminal"); 2º que la informacion criminal que instruyó el Gefe Politico y concluyó con la declaracion del Consejo y la suspension de los Regidores, es una serie de diligencias practicadas con el fin de averiguar los delitos de hurto de un sello, y de falsificacion, y de descubrir á los delinquentes é imponerles la pena merecida; 3º que en consecuencia, á los Regidores se les instruyó un verdadero proceso, siendo un hecho indisputable, que en él no se les hizo saber el motivo del procedimiento ni el nombre del acusador; no se les tomó declaracion, ni se les careó con los testigos que depusieron en su contra; no se les facilitaron los datos que constaban en el proceso, ni siquiera se les oyó, *porque no hubo tiempo*, resultando de todo esto la violacion de las garantías que otorga el citado artículo 20.

Considerando: respecto del artículo 21 que establece que la imposicion de las penas propriamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial, y que la política ó administrativa solo pueden imponer penas correccionales: 1º que pena, propriamente tal, es el castigo impuesto por el delito cometido, ó como dice Pacheco en su Derecho Penal, Leccion XIX, pági. 45, es un mal de cualquiera clase impuesto por el poder público á *los delinquentes*, y pena correccional, el castigo ó mal de pasion impuesto por faltas que consistan en infracciones de preceptos puramente económicos y que pueden reprimirse con medidas Gubernativas ó de Policía, (el mismo autor en la leccion 6ª página 123); 2º que la suspension de los Regidores, como quiera que se considere, es un mal de pasion impuesta por delitos verdaderos, como los de sustraccion ó hurto de un sello, falsificacion, ó violencia sobre la libertad electoral, que se les imputaba; 3º que la referida suspension aplicada por causa de un delito, está expresamente reconocida por los autores y por las leyes como pena propriamente tal, (Escriche, Dic. de Leg., artículo Pena, Pache-

co, lec. cit. y ley 4, tit. 31, Part. 7ª, vers. la sexta); 4º que tal como se decretó dicha suspension por tiempo indefinido, y sin la calidad de entretanto resolvía la autoridad judicial sobre la culpabilidad de los Regidores, equivale á la destitucion ó privacion del cargo que ejercian; 5º que la destitucion ó privacion temporal ó perpetua de un cargo por causa de un delito, es una verdadera pena como lo enseña Escriche en su Diccionario artículo "Privacion," y lo expresan terminantemente la ley de Partida citada, el decreto de 24 de Marzo de 1813 y especialmente la Suprema Ejecutoria de 10 de Octubre de 1870, que amparó á los diputados de Morelos contra una determinacion de la Legislatura, siendo muy digno de notarse que si el amparo se fundó en que la destitucion impuesta por falta de asistencia á las sesiones fué una verdadera pena y no una medida económica, como alegó la legislatura ¿con cuánta mas razon no se llamará pena propriamente tal, la suspension indefinida del cargo de Regidor por delitos graves del orden comun?; 6º que examinados los efectos y consecuencias de la suspension de los Regidores, es en sí misma una pena y de las mas graves que puedan imponerse; ya porque la declaracion de culpabilidad en que aquella se funda, ataca de un modo muy vivo y muy trascendental al honor, complemento de la vida del alma, y tesoro el mas precioso que el hombre tiene sobre la tierra; como porque les privaba, y en efecto los privó, del derecho político que tenían adquirido por el sufragio popular, de tomar una parte muy directa, aunque honesta, en las elecciones de diputados á la Legislatura. La pérdida de estos derechos dice, Pacheco, debe ser muy dolorosa, porque hiere y lastima á cualquiera individuo, menoscaba su personalidad política y todos la consideran como una pena. Por estas razones los criminalistas reputan á los ataques contra el honor y la privacion de los derechos políticos penas propriamente tales (Pacheco, lec. cit. y Gutierrez, Pract. Crim. dice sobre los delitos y las penas; y 7º que en

consecuencia la Gefatura Política ó el Consejo, que no tiene ningunas facultades, impuso una pena propiamente dicha con infracción del artículo 21.

Considerando: en cuanto al artículo 16:

1º Que la resolución del Consejo de Distrito, aun sin el carácter de pena, al suspender á los regidores de su encargo por haber tratado de falsificar el voto popular y de coartar la libertad electoral, extrayéndose al efecto el sello de la corporación para falsificar bolotas, ataca fuertemente el honor de los quejosos, pues una imputación por falsa ó infundada que sea, de haber alguno cometido un delito, es deshonrosa y difamatoria, principalmente si la hace el superior al inferior, (leyes 1ª tit. 9 vers. la otra manera y 2 tit. 6 Part 7ª).

2º Que la deshonra y la infamia son una afrenta vergonzosa que despoja al individuo de la buena reputación de que goza, le arrebatada la confianza de la Patria, de sus amigos y de sus conciudadanos, atraen sobre él un grito de desaprobación y de horror que hacen que le vean todos con repugnancia, cuidando de apartarse de él, como de un apestado para no contagiarse; y por último, sus amigos lo desprecian, sus adversarios le insultan y hasta los extraños parecen burlarse de su desgracia; (Gutierrez disc. sobre los delitos y las penas. Pacheco, derecho penal lec. XIX).

3º Que siendo como son tan crueles y dolorosos los padecimientos morales del hombre á quien se le arrebatada su honra, su crédito, su reputación, al grado de preferir y darse la muerte porque la vida misma le sirve de tormento, no es posible dudar que la suspensión de los Regidores, infiere molestias muy dolorosas en sus personas y que á impedir se causen arbitrariamente tiende el artículo 16 de la Constitución.

No se diga que este artículo solo habla de las molestias corporales que puede sufrir el individuo, porque él se refiere á la persona, que comprende al cuerpo y el espíritu, y porque de tal inteligencia aparecería que la Constitución dejó á merced de la arbitrariedad lo mas sagrado del hombre

que es su honor; que quiso dar garantías á la libertad, á la seguridad, al trabajo. etc, y se las negó al honor, mas valioso que todos los bienes del mundo.

4º Que demostrado como está que la suspensión de los quejosos en el ejercicio de sus derechos es una molestia á la que se refiere el artículo constitucional citado, debe averiguarse si fué inferida en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, fundado y motivado en causa legal.

5º Que de autos consta plenamente probado, que la suspensión se decretó por el Consejo de Distrito y no por el Gefe político, quien se constituyó únicamente ejecutor de aquella resolución, supuesto que no consta en la causa que se instruyó que se hubiese conformado con la opinión del Consejo, antes por el contrario, queriendo declinar toda responsabilidad, se limitó á decir á los Regidores: *“les remito la resolución del consejo para su conocimiento y fines consiguientes (fojas 1).”*

6º Que aunque el referido funcionario firmó la determinación del Consejo, no lo hizo propiamente como tal Gefe político, sino como miembro de él, segun el artículo 37 de la ley del Estado de 21 de Abril de 1868.

7º Que los Consejos de Distrito no tienen facultades ningunas, mucho menos resolutivas ó declarativas, pues su única misión es consultar al Gefe político, (artículo 41 de la ley citada).

8º Que en consecuencia, la molestia inferida á los Regidores y de lo cual se quejaron, no fué decretada por autoridad competente, por lo que se violó en ellos la garantía que otorga el artículo 16 constitucional.

9º Que aun suponiendo que el Gefe político por sí, ó de acuerdo con el Consejo, hubiese dictado la suspensión, todavia hay que averiguar si era competente para ello, si hubo causa legal y si esta fué fundada y justificada.

10º Que la suspensión de un individuo por causa de delito, de su encargo ó empleo,

es efecto exclusivo de la declaracion que hace la autoridad de haber lugar á formacion de causa contra él.

11º Que la autoridad judicial es la única competente para declarar con lugar á formacion de causa contra los Regidores, (Ley del Estado de 18 de Febrero de 1849, art. 11, cap. 2º del decreto de 24 de Marzo de 1813. Escriche, Dic. de Leg. artículo Juez de 1ª instancia de partido, párrafo VII, número 5, y juicio criminal contra jueces, párrafo II.)

12º Que si respecto de los auxiliares de los pueblos, está expresamente dispuesto que de las faltas gubernativas que cometan conozca la autoridad administrativa pero de las que importan un delito conozca la autoridad judicial *dando aviso al Ayuntamiento de la suspension del auxiliar*, (art. 9 del decreto del Estado de 7 de Enero de 1847), con mayor razon, tratándose de los consejales, debe decirse, que importando un delito la falta que se los imputa, decretará la suspension la autoridad judicial.

13º Que si bien es cierto que la ley de 21 de Abril faculta á los Gefes Políticos para suspender con causa justificada á alguno ó algunos (mas no á todos como sucedió en el presente negocio) de los regidores, no deben comprenderse en esta disposicion las causas que importan un delito, sino las faltas que cometan en lo económico ó administrativo, como terminantemente lo dispone el art. 17, frac. 2ª del decreto de 15 de Octubre de 1852, reglamentario de las atribuciones de los prefectos, hoy Gefes Políticos.

14º Que consta de autos y lo sabia el Gefe Político, ciudadano Juan Tegno, que el ciudadano Vergara Lope no tuvo otra mira al llevarse el sello á su casa, que el de ponerlo en seguridad para evitar que el secretario hiciese mal uso de él, como lo temia fundadamente, cuya providencia, tomada por el Presidente y aprobada por los consejales fué legal, como medida puramente económica de las muchas que tiene facultad de acordar.

15º Que una providencia justa, racional,

conveniente, dictada por el ciudadano Vergara Lope y aprobada por la corporacion, no puede ser causa *legal* para fundar en ella la resolucion del Consejo de Distrito.

16º Que cualquiera que hubiera sido la causa de la suspension de los Regidores y cualesquiera que fuesen los datos que la apoyaran no podia tenerse por *justificada*, si no se habian cumplido las condiciones que para ello establece la Constitucion peculiar del Estado en sus artículos 9 y 10, respecto de las providencias gubernativas, á saber: que se oiga previamente al acusado en cuanto al hecho y que existan contra él pruebas tan claras como la luz, bastando ver la informacion instruida contra los Regidores, para convencerse, de que ni se les oyó ni hubo para suspenderlos pruebas suficientes.

17º Que en consecuencia, los quejosos fueron *molestados* en sus personas sin orden de autoridad *competente* y sin causa *legal fundada ni motivada*, violándose la garantía que otorga el art. 16 de la Constitucion general.

Considerando por último:

1º Que de autos consta plenamente probado, que la verdadera causa de los procedimientos del Gefe Político contra los quejosos, fué la de poder influir mas directamente en las elecciones de diputados á la Legislatura para falsear el voto popular.

2º Que esta conducta constituye un ataque flagrante al principio de la soberanía popular y al sistema de Gobierno representativo sancionados por el Código fundamental, en sus artículos 39, 40, 41 y 109.

3º Que á mantener incólumes las instituciones enervando pacíficamente cualquiera disposicion que las ataque, han sido organizados los tribunales federales y establecidos los juicios de amparo. (Laboulaye, Historia de los Estados-Unidos, tomo 2º, Lec. VIII, ejecutoria de 10 de Octubre de 1870 en su parte expositiva.)

4º Que aunque los Estados son soberanos é independientes en lo que concierne á su régimen interior, y en virtud de esta so-

beranía pueden organizar los ayuntamientos como mejor les parezca, y determinar cómo han de ser nombrados, cómo suspensos, cómo disueltos, etc., no podrán ejercerla arbitrariamente atropellando las garantías y atentando contra la Constitución.

5º Que si bien es cierto que el nombramiento de los Regidores lleva imbuída la condición que la ley impone de que puedan ser suspensos por los Jefes Políticos, por lo que al usar de esta facultad no violan *generalmente hablando*, ninguna garantía, también lo es que esta misma facultad lleva imbuída la condición de respetar los derechos que como hombres competen á los Consejales, y por lo mismo, no podrán ejercerla sin guardar la forma de los procedimientos, salvaguardia de aquellos.

6º Que aunque también es cierto que los Jefes Políticos tienen facultad de impedir que se falsen las elecciones, no podrán ejercerla arbitrariamente, ultrajando deshonrando, postergando, mutilando, esclavizando etc., á los ciudadanos, ni menos arrojando sobre ellos la infamia de un delito.

7º Que si la justicia federal ha intervenido en la suspensión de los Regidores, no es porque quiera ingerirse en los asuntos económicos del Estado, ni porque quiera mezclarse en cuestiones puramente locales, sino porque en la manera de decretarse aquella y en el fondo de estas cuestiones hay un ataque flagrante á las garantías y á las instituciones republicanas.

8º Que al examinar los jueces federales si tal ó cual providencia que motiva un juicio de amparo está arreglada á la legislación particular del Estado, no es porque les corresponda cuidar de la observancia y aplicación de las leyes locales, sino porque en ellas debe encontrarse la competencia de algunas autoridades para juzgar y sentenciar á los ciudadanos, para aplicarles penas propiamente tales, para inferirles molestias en sus personas, familia, papeles... y posesiones, etc., á fin de determinarse si proceden ó no constitucionalmente, y

9º Que no debe admitirse como preten-

de el ciudadano Hermosillo, que solo cabe el recurso de amparo cuando la persona ofendida no encuentra en la legislatura particular del Estado el remedio del mal de que se queja, porque aunque parece que ésta fué la opinión del Ejecutivo de la Unión en su iniciativa de 30 de Octubre de 1868, el Congreso no la admitió, y multitud de ejecutorias demuestran lo contrario.

Por todo lo expuesto y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: Que la Justicia de la Unión ampara y protege á los ciudadanos Félix Vergara Lope, Mariano Navarro, Manuel Avelcyra, Tomás Hernandez, Jesus y José María Islas, Abraham Pastrana, Jesus Ozorno, y Jesus Arias contra la resolución del Consejo de Distrito que los suspendió en el ejercicio de sus funciones de Regidores, porque en el modo y causa porque se decretó se violaron las garantías individuales consignadas en los artículos 14, 16, 20 y 21 del pacto fundamental.

Hágase saber, pùbliqueso y remítanse estos autos á la Suprema Corte para la revisión de esta sentencia que definitivamente pronunció el ciudadano Juez de Distrito. —Doy fé.—*M. Mejía.*—*Francisco Briseño*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo, por los ciudadanos Félix Vergara Lope, Mariano Navarro, Manuel Avelcyra, Tomás Hernandez, Jesus y José María Islas, Abraham Pastrana, Jesus Ozorno y Jesus Arias, contra una providencia de la Jefatura Política de Pachuca, en virtud de la cual fueron suspensos del cargo de Regidores del Ayuntamiento de aquella ciudad; visto el informe de la autoridad contra quien seso-

licitó el recurso, las pruebas presentadas por los promoventes, las aducidas por el Ministerio Fiscal, así como los pedimentos de este. Vista la sentencia del Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, en la cual se concede el amparo á los quejosos, con todo lo demas que de autos consta y ver convino. Considerando: que la Gefatura política de Pachuca, al determinar con acuerdo del Consejo de Distrito, la suspension de los quejosos, en su calidad de Regidores del Ayuntamiento de esa ciudad, fundándose en la fraccion 10ª de la ley de 21 de Abril de 1868, expedida por el Congreso del Estado, se ha referido á las funciones públicas del cuerpo municipal. Considerando: que aún en el caso en que la determinacion de la Gefatura política no fuera conforme á las leyes del Estado, la responsabilidad que pudiera resultarle, no seria objeto de amparo; y considerando finalmente: que la óden de suspension, tal como se haya formulada en el acta del 4 de Enero de este año, y que sirve de apoyo á la queja, no importa violacion alguna de las garantías que otorgan los artículos 20 y 21 de la Carta fundamental de la República. Con tales fundamentos se declara: Primero: Que es de revocarse la sentencia del Juzgado de Distrito de Hidalgo, que concedió el amparo á los quejosos; y se decreta: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los ciudadanos Félix Vergara Lope, Mariano Navarro, Miguel Aveleyra, Tomás Hernandez, Jesus y José María Islas, Abraham Pastrana, Jesus D. Ozorno, y Jesus Arias, contra los procedimientos de la Gefatura Política de Pachuca, en virtud de los cuales fueron suspensos en el cargo de Regidores del Ayuntamiento de esa ciudad. Segundo: Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de Distrito de su origen con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Cor-

te Suprema de Justicia de los Estados- Unidos Mexicanos, y firmaron; firmando tambien el ciudadano Magistrado Castillo Velasco, quien dejó su voto en la forma prescrita por el Reglamento, antes de separarse con licencia de esta Suprema Corte.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*L. Guzman.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por Vicente Martínez, contra una providencia del Gefe Político de Coixtlahuaca que lo destinó al servicio militar en el ejército permanente.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El ciudadano Vicente Martínez de Coixtlahuaca, fué consignado por el Gefe Político de este Distrito, al servicio militar del ejército nacional, y por tal procedimiento ha ocurrido pidiendo amparo á la Justicia federal, alegando que han sido violadas en su persona las garantías que concede la Constitucion federal en sus artículos 5, 13, 20 y parte 2ª del 21. Alega tambien el interesado, que con tal acto se le han ocasionado perjuicios de consideracion, por cuanto, ademas de no ser efectivo que es pernicioso y de mala conducta, sostiene con su trabajo personal á una hija menor, á su mujer, su suegra, dos hermanas del mismo quejoso y su cuñada.